

168-D-17

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL: San Salvador, a las doce horas y diez minutos del día cuatro de marzo de dos mil diecinueve.

Por agregados los escritos del [REDACTED] [REDACTED] cuyas siglas son [REDACTED], [REDACTED] con cláusula especial, licenciada [REDACTED], con la documentación adjunta (fs. 15 al 87).

A ese respecto, se hacen las siguientes consideraciones:

I. Por resolución de las nueve horas con cuarenta minutos del día veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho (fs. 12-13), se previno a [REDACTED] [REDACTED] que indicara: *i)* las fechas y la forma en que se realizaron las “reiteradas peticiones” solicitando que se dejara sin efecto la suspensión de la obra, al Departamento de Arqueología de SECULTURA; y que mencionara si ha existido algún tipo de resolución de parte de esa Institución; *ii)* mencionara cuáles son los “obstáculos y trabas” que ha puesto SECULTURA para emitir la autorización de reanudación de la obra; *iii)* explicara qué trámite, procedimiento o servicio ha sido retardado por los denunciados, en los términos del Art. 6 letra i) de la LEG; y *iv)* adjuntara copia simple de notificación de paro de obra y comunicado de prensa emitido por el [REDACTED] documentos que omitió anexar a su denuncia.

II. 1. Al respecto, [REDACTED] [REDACTED] en síntesis indica que:

i) Durante el mes de septiembre de dos mil diecisiete, remitió diferentes notas a la señora Silvia Elena Regalado, Secretaria de Cultura de la Presidencia, reiterando que el referido proyecto ya contaba con los permisos respectivos, por lo que debían anular parcialmente la suspensión y permitir que la empresa [REDACTED] continuara con las obras, agrega que en respuesta de lo anterior la referida funcionaria emitió un “INFORME INMEDIATO DE VISITA DE SUPERVISION AL PROYECTO LAS VICTORIAS, de fecha veinte de septiembre de 2017” en el cual se estableció que no era factible continuar con el proyecto de urbanización Las Victorias.

ii) SECULTURA se ha dedicado a promover acciones de acoso y hostigamiento, ya que iniciaron diligencias de medidas cautelares en el Juzgado Ambiental de Santa Ana e interpusieron denuncia ante la Fiscalía General de la República, Subregional Santa Ana y Subregional Sonsonate, en contra de la empresa [REDACTED].

iii) Finalmente, indica que los funcionarios denunciados han transgredido la prohibición ética contenida en el Art. 6 letra “i” de la Ley de Ética Gubernamental (LEG), porque posterior a los estudios arqueológicos realizados al proyecto Urbanización Las Victorias Sonsonate, no se registró ningún bien cultural inmueble, que amerite su conservación, “por lo que no tiene razón de ser que la paralización de la obra de construcción ya no tenía sentido de continuar (...) por lo que era procedente que se levantaran las medidas que impedían la continuación de la obra en construcción (...)” [sic].

2. En su escrito presentado el día catorce de septiembre de dos mil dieciocho, [REDACTED] [REDACTED] informa que para conocer la problemática del proyecto Las Victorias, se creó en la Asamblea Legislativa la Comisión Especial para la Investigación del Problema conocido

como Tacuscalco entre los municipios de Sonsonate y Nahuilingo, y que en ese marco fueron convocados en fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, reunión en la que expusieron todos los actos cometidos por los funcionarios de SECULTURA, hoy Ministerio de Cultura (f. 60).

III. El artículo 81 letras b) y d) del Reglamento de la LEG establecen como causales de improcedencia de la denuncia o aviso que el hecho denunciado “no constituya transgresión a las prohibiciones o deberes éticos” regulados en los arts. 5, 6 y 7 de la LEG y que “sea de competencia exclusiva de otras instituciones de la Administración Pública”.

Conforme al principio de tipicidad, toda conducta u omisión constitutiva de infracción administrativa debe estar descrita con claridad en una norma, por consiguiente, la facultad sancionadora de esta institución se restringe únicamente a los hechos contrarios a los deberes y prohibiciones éticos regulados en la LEG.

IV. 1. Los hechos denunciados no pueden ser controlados por este Tribunal porque al contrastarlos con los deberes y prohibiciones éticos establecidos en la Ley de Ética Gubernamental (LEG) se advierte que los mismos no se perfilan como transgresiones a éstos, pues versan sobre la inconformidad de la denunciante respecto a la decisión adoptada por la Secretaría de la Cultura, de suspender la ejecución del proyecto denominado “Las Victorias”, ya que el sindicato de trabajadores que representa ha sido afectado con dicha medida.

Es decir, que la denunciante cuestiona la legalidad de las actuaciones de los servidores públicos denunciados, al suspender las obras de construcción del citado proyecto habitacional y no extender el permiso respectivo a la empresa [REDACTED], para continuar con la ejecución del proyecto.

Al respecto, es dable reiterar que la competencia de este Tribunal es conocer de asuntos que constituyan una vulneración a los deberes éticos y/o prohibiciones éticas determinadas en los arts. 5, 6 y 7 de la LEG, por esa razón no tiene la facultad de examinar la legalidad de los actos de la Administración Pública, pues esa es una atribución exclusiva del Órgano Judicial, de conformidad con el artículo 172 de la Constitución de la República.

2. Además, la denunciante atribuye a los servidores públicos denunciados el retardo en las solicitudes de “levantamiento de paro” efectuadas en los meses de septiembre y octubre de dos mil diecisiete, sin embargo consta en el expediente -y la misma denunciante lo señala de esa forma- que la licenciada Silvia Elena Regalado en respuesta a dichas solicitudes “emitió un INFORME INMEDIATO DE VISITA DE SUPERVISION AL PROYECTO LAS VICTORIAS, de fecha veinte de septiembre de 2017”.

3. Ciertamente, conviene señalar que toda autoridad administrativa está supeditada a una serie de principios de rango constitucional, entre los que destaca el de *legalidad* consagrado en el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución.

Como consecuencia de ello, la Administración Pública sólo puede actuar cuando existe una ley formal que la habilite para tal efecto, y dentro de los límites establecidos por la misma.

Así, para que la denuncia sea procedente ante este Tribunal es imprescindible que el asunto expuesto en la misma sea propio del marco legal de los artículos 5, 6 y 7 de la LEG, por lo que al trascender de este límite habrá distintas acciones en otras áreas del ordenamiento jurídico que ya no corresponde conocer a esta autoridad.

Por tanto, no corresponde a este ente administrativo ordenar a los señores Silvia Elena Regalado, Irma Flores y Hugo Díaz, que conforme a los estudios técnicos efectuados, emitan la autorización a la empresa [REDACTED] para continuar con la ejecución del proyecto "Las Victorias", ubicado en Sonsonate.

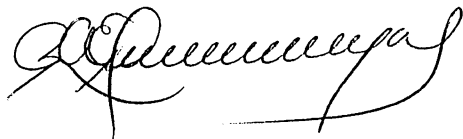
No obstante la imposibilidad por parte de este Tribunal de controlar esa actuación, ello no significa una desprotección a los derechos que pudieran verse comprometidos sino únicamente – como se dijo– que deberán ser otras instancias las que, dentro de sus competencias, evalúen y determinen las responsabilidades que correspondan, pudiendo el denunciante, si así lo estima pertinente, avocarse a las mismas a fin de denunciar lo ocurrido.

De manera que, al exceder la esfera de competencia del Tribunal, la denuncia adolece de un error de fondo insubsanable que impide continuar con el trámite de ley correspondiente.

Por tanto, y con base en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Ética Gubernamental y 81 letras b) y d) de su Reglamento, este Tribunal **RESUELVE**:

Declárase improcedente la denuncia presentada por el [REDACTED] [REDACTED] por medio de su apoderada general judicial con cláusula especial, licenciada [REDACTED] contra los señores Silvia Elena Regalado, Secretaria de la Cultura de la Presidencia; Irma Flores, Directora de Patrimonio Cultural de SECULTURA; y Hugo Díaz, Jefe del Departamento de Arqueología de SECULTURA.

Notifíquese.



PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL QUE LO SUSCRIBEN

